

Es la política...

Por José Rilla

La lluvia de datos es desbordante y alguien podría pensar que la situación de la educación uruguaya está sobrediagnosticada. Esto es parcialmente cierto, pero en todo caso la gravedad de la hora nos coloca ante la verdadera naturaleza del problema. A pesar de todos los esfuerzos técnicos y económicos, no hemos dado en la tecla y la hondura del problema nos oculta la razón primaria de nuestros fracasos. Ella está, por un lado, en la indiferencia ciudadana -cosecha mala de una siembra más que centenaria- y por otro, en la defección de la política y los políticos.

Las cuestiones de política educativa son más de política que de educación. Están vinculadas a las razones por las que convivimos en la diferencia y la diversidad y a nuestra capacidad de elaborar decisiones legítimas, públicamente discutidas y fundadas entre ciudadanos. En este caso se trata de decisiones en una delicada materia, nada menos que aquello que los mayores hacemos respecto a los menores, lo que deseamos legar y lo que estamos dispuestos a desechar, los derechos y obligaciones de lo nuevo ante lo viejo.

Desde hace mucho tiempo, más de un siglo y medio, la discusión educativa uruguaya circula por carriles más mezquinos que entienden a la política como campo de batalla; a todos atrapa la pasión de dominio: ¿quién manda aquí?, ¿quién es el dueño de la llave maestra? ¿quién pone en marcha "la máquina de la felicidad", como decía Varela? Esto es más complejo de lo que parece porque en la pregunta por el mando habita otra: ¿para qué sirve la educación? Es una pregunta de respuestas peligrosas y a menudo desmedidas; esconden una veta autoritaria que aunque disimulada por la abnegación generosa supone a alguien con derecho a decidir por los demás, a darle un sentido a sus vidas, y por extensión, a poner a una sociedad al servicio de algún proyecto o designio que la trasciende. Generalmente los sujetos pasivos de esta situación son los más débiles, los que saben menos, los más pequeños, los más jóvenes, los menos organizados, los más pobres. Quien trabaje en la docencia ignorando esta enorme desigualdad incurrirá en abuso; quien haga política educativa desconociendo que es la sociedad la que se educa a sí misma y de las maneras c r e c i e n t e m e n t e más variadas se precipitará ingenuamente al mesianismo y la tecnocracia, atajos con los que es posible sobrevivir sin el cotejo con el ciudadano.

Una lección posible y deseable de la comprobación de este fenómeno debería ser la de la prudencia en nuestros empeños educativos (no hablo de debilidad, ni mucho menos de inacción) y en contrapartida, la confianza en lo que la gente pueda hacer consigo misma, en su capacidad autónoma, previa al

Estado, a la Escuela, a los Sabios y Maestros para forjarse su camino. En estos tiempos de rankings ¿por qué nadie recuerda que los buenos desempeños de Finlandia o de Alemania están asociados al involucramiento ciudadano, a la vida densa y rica en el seno de las concretas instituciones escolares? Dejar a los niños y jóvenes en la puerta de las escuelas y liceos, y a la educación en manos de los educadores parece tranquilizador, pero a la larga genera un vacío de responsabilidad. Subamos el nivel de exigencia: es mucho más difícil lograr una trama de confianza y exigencia acotada en el espacio y el tiempo de una institución -una escuela, un liceo, un barrio, una generación- que implementar cualquier programa social o educativo desde las alturas del Estado onnisapiente.

Además del déficit ciudadano la historia uruguaya es pródiga en ejemplos acerca de cómo los despliegues educativos acusaron problemas de legitimidad política. Las tres dictaduras que padeció la república -iniciadas por Latorre, Terra y Bordaberry - se asociaron a transformaciones importantes de la educación, buenas y malas: la institución del sistema escolar básico, el nacimiento de la educación media moderna, el "saneamiento" salvaje de los cuadros docentes, respectivamente. Luego, los esfuerzos reformistas del Uruguay democrático posteriores a 1985 -reformismo perpetuo que cultivamos- básicamente los de Pivel Devoto contemporáneo de la CIDE y de Germán Rama expresión de la CEPAL, encontraron una resistencia política tan miserablemente exitosa como capaz de llegar, desde allí, al gobierno de la educación y al bloqueo de cualquier ímpetu transformador. (Hoy leo que el presidente Mujica festeja a Rama y no puedo dejar de pensar en los linchamientos sindicales de profesores que osaron colaborar con él).

Los partidos políticos han sido responsables del magro involucramiento ciudadano en la educación. Delegando la tarea en los técnicos y en los educadores hicieron de los padres y las familias unos comensales poco exigentes, pasivos consumidores de paquetes cerrados. No trataron el tema como un asunto político, atinente a la polis en la que no hay primacías a priori y en la que conviven expertos y profanos. Cayeron todos bajo la seducción de la técnica y después de "la autonomía", entendida como derecho patrimonial de los que enseñan y no como derecho fundamental de los que aprenden. La educación devino así campo de batalla entre vanguardias, disputa de entendidos y militantes, zona de pruebas y maniobras para guerras mayores, todo en nombre del interés general. (Vi ayer en la TV a una dirigente sindical decir que no era conveniente empezar el año con un paro y que había que estar con "los chiquilines en la trinchera").

La izquierda que está en el gobierno -que no es toda la izquierda- tiene un problema adicional, se entrevera en una madeja de contradicciones: siempre peleó por el mando y el sentido de la educación; hoy que parece tener lo primero se encuentra con un mundo vacío, sin sentido. Más aún, desfondado y con rendimientos decrecientes en cualquier plano que se lo mida. Elogia ritualmente a Varela que puso la escuela en línea con la economía moderna, el adiestramiento y la ciudadanía igualitaria, pero no soporta la idea de poner a la educación en el eje del Uruguay globalizado, ni siquiera del "país productivo". Y

cuando los partidos todos convocados por el presidente Mujica parecieron tomar lo urgente en sus manos y forjaron un acuerdo (marzo de 2010), la influyente fracción sindical y corporativa puso el grito en el cielo en nombre de una autonomía que no es otra cosa, a esta altura, que la más fenomenal privatización de un bien público.

Nuestro problema no está en el conocimiento de los pésimos desempeños ni en la identificación de los nudos más dramáticos (carrera docente que premia al mediocre, escala inmanejable de las instituciones, calidad y pertinencia del aprendizaje, deserción, castigo a los más pobres). Nuestro problema es político (legitimidad, autoridad, atribución, responsabilidad, rendición de cuentas) y el momento debe ser político: avanzar sobre el campamento corporativo para ponerlo en su lugar, crear condiciones para que los educadores en serio tengan su espacio y su palabra, liberados del chantaje gramsciano de los sindicatos (¡pobre Gramsci!), condiciones para que la sociedad toda presente sus ideas, sus iniciativas, sus ensayos. Y si no tiene ideas nuevas, que sienta su falta como tarea pendiente, que las aprenda.

La educación media y universitaria es un problema serio en el mundo. Esto no sirve de consuelo porque en el Uruguay es una tragedia. La deserción, la desafección, la fuga, el fracaso en los aprendizajes son la evidencia más contundente. Pero quedaremos mancos si no advertimos el contexto completo, histórico: el proyecto pedagógico occidental abierto en el siglo XIX, proyecto político de cabo a rabo, el que sirvió a las naciones, los Estados y los mercados está definitivamente caduco.

No sabemos qué hacer con los jóvenes para quienes todo es hoy, para quien no hay pasado ni futuro: "el presente como última morada", dice la mejicana Rossana Reguillo. Si fuera así, utopía de las utopías: ¿para qué la educación? Erraremos de nuevo si pensamos que la política no está obligada a decir y hacer lo suyo con decisión y energía, o si creemos que está todo inventado y hay que aplicar recetas exitosas en otros lares, o que es una cuestión de remover obstáculos y aplicar instrumentos eficaces. Es desde la política, con los ciudadanos despiertos, con los partidos y el Parlamento que tengamos, donde ha de nacer un pacto que nos haga alguna vez responsables y podamos hablar, sin mentirnos, de educación pública. Lleva tiempo, mucho tiempo.